

Justicia climática y entorno construido en Europa

Por Emilia Oscilowicz, Lisa Hannuschke, Melissa García-Lamarca, Isabelle Anguelovski, Amilia Calderón-Argelich y James J.T. Connolly

Objetivo

Este informe, elaborado gracias a la colaboración entre la Alianza de Ciudades Neutras en Carbono (CNCA) y el Laboratorio de Barcelona para la Justicia Ambiental Urbana y la Sostenibilidad (BCNUEJ), tiene por objeto ayudar a los gobiernos locales, las organizaciones cívicas y los socios comunitarios a comprender mejor cómo **las desigualdades estructurales** determinan los resultados climáticos en las ciudades europeas.



El informe tiene tres objetivos principales:

- Explicar cómo los sistemas de desigualdad arraigados —que operan a nivel nacional, regional y municipal— siguen condicionando la vivienda, las infraestructuras, el espacio público y el acceso a los recursos de formas que perjudican a determinados grupos.
- Mostrar cómo se viven estas desigualdades en la vida cotidiana de las ciudades europeas, con especial atención a Barcelona (España), Glasgow (Reino Unido) y Nantes (Francia), y destacar cómo están respondiendo los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias.
- Proporcionar herramientas y enfoques prácticos que puedan ayudar a los municipios a armonizar la acción climática con la justicia social.

En esencia, el informe sostiene que la política climática no puede tener éxito a menos que aborde las desigualdades subyacentes que hacen que algunas comunidades sean más vulnerables que otras.

La construcción de ciudades resilientes al clima requiere no solo medidas medioambientales para hacer frente a los impactos climáticos, sino también un acceso equitativo a la vivienda, el transporte, los servicios públicos y la toma de decisiones.

En última instancia, este informe pretende ofrecer un marco que conecte el análisis estructural con vías de acción que permitan a las ciudades de la CNCA y a sus socios dismantelar las barreras sistémicas y promover la justicia climática para todos los residentes urbanos.

¿Qué son las desigualdades estructurales?

Las desigualdades estructurales son los sistemas sociales, económicos, jurídicos y espaciales a largo plazo que benefician a algunos grupos mientras excluyen o perjudican a otros. Estas desigualdades se ven reforzadas por las instituciones, los mercados inmobiliarios, el desarrollo urbano desigual y el acceso desigual a los recursos medioambientales y económicos.

En Europa, estos patrones están determinados por varias fuerzas históricas y políticas, entre ellas el colonialismo, las políticas migratorias, la reestructuración del estado del bienestar y décadas de desarrollo urbano orientado al mercado. En conjunto, estos factores influyen en quién está más expuesto a los riesgos climáticos, quién tiene acceso a una vivienda segura y asequible, quién se beneficia de la inversión urbana y quién es empujado a los márgenes de las ciudades debido al cambio climático o a las medidas climáticas.

El cambio climático no afecta a todos los residentes por igual. Las olas de calor, las inundaciones, la mala calidad del aire y el aumento de los costes energéticos suelen tener un mayor impacto en las personas que ya se enfrentan a desventajas económicas o sociales. Al mismo tiempo, las propias políticas climáticas pueden agravar involuntariamente la desigualdad si aumentan los costes de la vivienda, desplazan a comunidades vulnerables o dan prioridad a zonas ya prósperas.

Aunque a menudo se considera que muchos países europeos cuentan con sólidos sistemas de bienestar e infraestructuras públicas, persisten importantes formas de exclusión e inseguridad en las ciudades.

La inseguridad en materia de vivienda, la pobreza energética, el acceso limitado a las prestaciones sociales y la exposición desigual a los riesgos medioambientales siguen afectando a los migrantes, las comunidades racializadas, los hogares con bajos ingresos y otros grupos marginados.

En las últimas décadas, la desregulación, la privatización, las políticas de austeridad, las leyes de inmigración restrictivas y la financiarización del desarrollo urbano han debilitado muchas protecciones públicas y han determinado un acceso desigual a la vivienda y al apoyo social, creando formas de vulnerabilidad en capas que afectan de manera desproporcionada a los residentes marginados.

¿Cómo se elaboró este informe?

Con el apoyo de la CNCA, el informe se elaboró mediante un proceso de investigación multimétodo dirigido por la BCNUEJ en colaboración con profesionales de Barcelona, Glasgow y Nantes. La investigación combina:

- Revisiones de las políticas nacionales de vivienda y planificación;
- Literatura académica y científica sobre la desigualdad estructural y la justicia climática urbana en Europa;
- Entrevistas semiestructuradas con residentes, líderes comunitarios, personal municipal y profesionales en 2019-2020 y 2025

Esta combinación de análisis de políticas y experiencias vividas permite al informe conectar las tendencias estructurales más amplias con las realidades cotidianas a las que se enfrentan los residentes en diferentes ciudades.

Conclusiones clave: Desigualdades estructurales en tres ciudades

Barcelona

En general, Barcelona ha experimentado una importante transformación urbana en las últimas décadas, especialmente tras la crisis financiera de 2008. La inversión, el turismo y la remodelación han reconfigurado la ciudad, pero los beneficios no se han repartido de forma equitativa. Muchos residentes de bajos ingresos y marginados siguen excluidos de las ventajas asociadas al desarrollo urbano verde y resiliente al clima.

Desigualdades en materia de vivienda

El mercado inmobiliario de Barcelona es altamente especulativo, y solo una pequeña parte de la vivienda cuenta con protección social. Los inquilinos —especialmente los migrantes y los residentes racializados— a menudo se enfrentan a la discriminación, al aumento de los alquileres y a los «desalojos por reformas», en los que los inquilinos son desplazados a través de las renovaciones o la remodelación de los edificios. El aumento del turismo y el creciente atractivo de los barrios más verdes han añadido una nueva presión al mercado inmobiliario. En respuesta, los sindicatos de inquilinos y los activistas por la vivienda se han movilizado para hacer frente a los desahucios y a las prácticas abusivas en el alquiler.

Desigualdades medioambientales y climáticas

Los barrios de clase trabajadora, tanto en distritos céntricos como el Raval como en zonas periféricas como La Prosperitat, son especialmente vulnerables al calor extremo debido a la densidad de viviendas, la mala ventilación y el acceso limitado a espacios públicos verdes. Aunque Barcelona ha invertido en iniciativas climáticas y de ecologización, algunos de estos proyectos también han aumentado el riesgo de «gentrificación verde», en la que las mejoras medioambientales contribuyen al aumento de los costes y al desplazamiento.

Desigualdades económicas

La economía de Barcelona está cada vez más polarizada y depende en gran medida del turismo y del sector servicios. Muchos de estos empleos ofrecen una protección laboral limitada, implican una mayor exposición a las condiciones ambientales y requieren desplazamientos costosos. Los migrantes y los trabajadores con empleos estacionales o en la construcción tienen pocas posibilidades de beneficiarse del desarrollo económico verde.

Glasgow

En general, la transición de Glasgow tras décadas de declive industrial ha creado tanto oportunidades como nuevas formas de desigualdad. Las estrategias de regeneración destinadas a atraer turismo, industrias creativas y residentes con mayores ingresos a menudo han concentrado la inversión en zonas ya favorecidas, mientras que muchas comunidades siguen enfrentándose a profundos retos económicos y sociales.

Desigualdades en materia de vivienda

Las políticas de privatización de la vivienda, incluyendo el derecho a compra y la transferencia del parque de viviendas de 2002, redujeron significativamente la capacidad de la vivienda pública. Al mismo tiempo, la construcción de nuevas viviendas no ha satisfecho adecuadamente las necesidades sociales ni los objetivos de asequibilidad. El aumento de los alquileres y la inseguridad de la vivienda han llevado a los sindicatos de inquilinos y a los grupos de defensa a presionar para obtener mayores protecciones para los inquilinos.

Desigualdades medioambientales y climáticas

Los residentes de clase trabajadora, los migrantes y los refugiados siguen sufriendo pobreza energética, mala calidad de la vivienda y los consiguientes efectos sobre la salud. Los proyectos climáticos y de sostenibilidad suelen concentrarse en zonas que ya se consideran atractivas para la inversión, mientras que las comunidades vulnerables siguen expuestas a las cargas medioambientales.

Desigualdades económicas

Glasgow sigue sufriendo los efectos a largo plazo de la desindustrialización, entre ellos el desempleo, los empleos de baja calidad y el aumento de la desigualdad económica. Desde principios de la década de 2000, la estrategia de regeneración de la ciudad ha vinculado cada vez más la reurbanización impulsada por la cultura con los objetivos de transición ecológica, especialmente tras la cumbre climática COP26 de 2021.

Sin embargo, los beneficios de estas iniciativas no se han distribuido de manera equitativa.

Nantes

En general, Nantes ha seguido una estrategia ambiciosa centrada en la habitabilidad urbana, el transporte público, la ecologización y la reurbanización postindustrial. En comparación con las otras ciudades objeto de estudio, su mayor compromiso con la vivienda social ha ayudado a proteger a los residentes con ingresos más bajos. Sin embargo, estas protecciones se ven cada vez más presionadas debido a los retos nacionales más amplios en materia de vivienda.

Desigualdades en materia de vivienda

Nantes cuenta con una larga tradición en la oferta de vivienda social, lo que ha contribuido a proteger a muchos residentes de una grave inseguridad en materia de vivienda. Sin embargo, las políticas de renovación urbana, las estrategias de mezcla social y los recortes presupuestarios a nivel nacional amenazan con frenar la construcción de nuevas viviendas sociales y desplazar a los residentes con menos recursos, lo que a su vez afecta a la cohesión social y al sentido de comunidad.

Desigualdades medioambientales y climáticas

Las importantes inversiones públicas en transporte y espacios verdes han mejorado el acceso a los servicios medioambientales en toda la ciudad. No obstante, algunos proyectos de desarrollo verde siguen orientados al ocio y a los usuarios de ingresos medios, lo que crea el riesgo de que las comunidades de clase trabajadora y racializadas —en particular los residentes romaníes— puedan seguir enfrentándose a la exclusión.

Temas transversales clave

1. La vivienda es el motor central de la desigualdad social y climática

En las tres ciudades, la vivienda se reveló como la base de una desigualdad social y climática más amplia. La asequibilidad, la calidad, la ubicación y la resiliencia climática de la vivienda determinan el acceso al empleo, al transporte, a los servicios y a la seguridad ambiental. Por lo tanto, una vivienda segura y asequible es esencial para desarrollar la resiliencia climática.

2. La desregulación y el desarrollo urbano desigual agravan la vulnerabilidad

Décadas de privatización, desregulación y reducción de la inversión pública han debilitado muchos sistemas diseñados para proteger a los residentes, entre ellos la vivienda pública, el transporte, los servicios sociales y la plantilla municipal. Los entrevistados de las tres ciudades destacaron que incluso las políticas climáticas y sociales bienintencionadas se ven a menudo socavadas por las presiones del mercado y las lagunas normativas que impiden que las poblaciones vulnerables se beneficien plenamente.

3. Las comunidades históricamente marginadas suelen quedarse atrás

Los residentes con bajos ingresos, los migrantes, las mujeres, las personas con discapacidad y las comunidades racializadas siguen enfrentándose a barreras para acceder a una vivienda asequible, a oportunidades económicas, a la participación política y a la protección climática. Sus necesidades suelen pasarse por alto en los procesos de planificación y elaboración de políticas, mientras que su capacidad para influir en la toma de decisiones sigue siendo limitada.

4. El acceso a los espacios verdes y al transporte público sigue siendo desigual

Aunque las tres ciudades han invertido en infraestructuras más ecológicas y en un transporte más sostenible, el acceso sigue siendo desigual. Las comunidades de clase trabajadora, los migrantes, los residentes con discapacidad y las mujeres o las personas no binarias suelen enfrentarse a mayores barreras de movilidad y a un acceso reducido a parques, transporte público y otros servicios públicos. Los sistemas de transporte respetuosos con el clima también pueden excluir involuntariamente a residentes cuyos desplazamientos se ven condicionados por responsabilidades de cuidado, discapacidad, aislamiento espacial o la asequibilidad de la vivienda.

Orientaciones y recomendaciones políticas

Herramientas y estrategias de justicia climática

Entre las medidas recomendadas se incluyen:

- Diseñar programas de eficiencia energética y rehabilitación que sean accesibles tanto para inquilinos como para propietarios y que no desplacen a los residentes con bajos ingresos;
- Crear campañas de divulgación y educación sobre la acción climática que lleguen a las comunidades marginadas y les beneficien;

- Involucrar a los migrantes, los jóvenes, los cuidadores y otros grupos infrarrepresentados en la adaptación al cambio climático y la planificación de infraestructuras verdes; y
- Ampliar los procesos de planificación participativa para que los residentes puedan influir en las políticas climáticas locales.

Acción climática centrada en la vivienda

El informe también recomienda:

- Apoyar las alianzas entre cooperativas de vivienda y bancos cooperativos éticos para financiar la construcción y renovación de viviendas sin ánimo de lucro;
- Ampliar las protecciones a los inquilinos y las políticas de estabilización de alquileres para reducir las presiones de desplazamiento;
- Fortalecer los sistemas de vivienda pública, mixta y social de manera que se aborde la reducción de la financiación de dichos programas y se simplifiquen los procesos financieros y administrativos; y
- Garantizar que las mejoras en la vivienda relacionadas con el clima no aumenten la exclusión ni la inseguridad en materia de vivienda.

Construir una economía urbana más inclusiva

Las recomendaciones incluyen:

- Recuperar el control municipal sobre el transporte público mediante modelos de concesión o de propiedad pública;
- Apoyar a las redes cívicas, los sindicatos y las organizaciones comunitarias que trabajan en temas de vivienda, transporte, energía y trabajo; y
- Garantizar que el desarrollo económico verde genere empleos seguros, accesibles y con salarios justos.

En resumen, el informe concluye que la acción climática y la justicia social deben abordarse conjuntamente. Las ciudades europeas no pueden alcanzar una verdadera resiliencia climática si las desigualdades existentes siguen determinando quién se beneficia de la inversión, quién se enfrenta a riesgos medioambientales y quién queda excluido de la transformación urbana.

[Descargar el informe completo](#)



CNCA
CARBON NEUTRAL CITIES ALLIANCE

BCNUEJ

Barcelona
Laboratory for Urban
Environmental Justice
and Sustainability